

San Miguel, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En lo relativo a la objeción documental

Primero: Que la parte demandada, dentro de plazo, objetó por falsedad uno de los documentos acompañados por la demandante en esta sede, específicamente, aquel consistente en una impresión de la página web del Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al valor de tasación del vehículo materia de autos, indicando que tal constancia sólo da cuenta de una tasación genérica de diversos modelos de automóviles, pero no del vehículo en concreto asunto de esta *Litis*, por lo que adolece de falsedad.

Segundo: Que evacuado el traslado conferido, se solicitó su rechazo, fundado en que no concurre la causal de tacha documental deducida, por cuanto se cuestiona que se trate de una tasación genérica, y no del automóvil objeto del juicio, lo que no constituye una falsedad, desde que se le imputa al documento que su contenido haya sido alterado, se aleje de la realidad, o que no haya sido emitido por la institución que se indica.

Tercero: Que, como se observa, no se le atribuye al instrumento cuestionado una falsedad material o ideológica, sino que se cuestiona concretamente, que al corresponder a una tasación genérica de diversos modelos de vehículos, y que no expresa la tasación del vehículo materia de autos en específico.

Como se aprecia, el reproche formulado, no dice relación con un supuesto de “falsificación”, pues si bien, el instrumento corresponde a una consulta de la tasación fiscal que para efectos de la determinación del permiso de circulación se le atribuye a los vehículos de la marca, modelo y año correspondientes al automóvil del actor, ello no implica su falsedad, sino más bien un cuestionamiento a su valor probatorio, asunto que, como es sabido, corresponde a una facultad exclusiva y excluyente de los jueces del mérito, que debe ser realizada por ellos, en el estadio procesal pertinente, razón por la cual, la objeción alegada, será desestimada, sin perjuicio de la fuerza de convicción que se le atribuya en su examen ponderatorio.

En cuanto a los recursos de apelación

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su considerando trigésimo segundo, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar, y, además presente:



Cuarto: Que en esta instancia, la parte del demandante civil del señor Carlos Mancilla Sandoval, acompañó, con citación, los siguientes documentos:

a) Copia del duplicado del permiso de circulación del año 2019, correspondiente al vehículo automóvil PPU HSHR-82-6, marca Kia Motors, año 2016, modelo Rio 4 Ex 1.4L 6 MT AC DAB A, a nombre del demandante, en el que se señala como monto de tasación, la suma de \$6.080.000.-

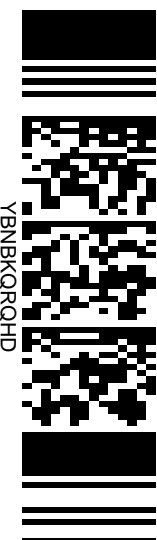
b) Copia extraída desde la página web del Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a “Consulta de Tasación”, que informa acerca de los valores de tasación fiscal y de permisos de circulación, dando cuenta del resultado de la búsqueda relativa al año 2019, de automóviles cuyo año de fabricación es el 2016, marca Kia Motors, indicándose que el modelo Río 4 Ex 1.4L 6MT AC DAB ABS, al año 2019, su tasación estaba valorada en \$6.080.000.- y el permiso de circulación, en la suma de \$95.365.-

Quinto: Que conforme se lee de la decisión de primer grado, se estableció la responsabilidad infraccional de la querellada, luego de acreditarse que el demandante, el día 28 de diciembre de 2019, concurrió en el automóvil de su propiedad, marca Kia Motors, PPU HSHR-82-6 al “Mall Plaza Sur”, representada por la demandada, lugar donde realizó actos de consumo y en las dependencias que ofrece para tales efectos, dejó estacionado dicho vehículo, lugar desde el cual fue sustraído, de lo que se percató al regresar a buscarlo, atribuyéndosele a la demandada, como se lee en el motivo vigésimo primero, un actuar negligente, al no demostrar en juicio, siquiera contar con medidas de seguridad destinadas a evitar riesgos como los de la especie; por lo que, correctamente, a juicio de esta Corte, se estableció el vínculo de causalidad entre la conducta de la demandada y la pérdida del automóvil, correspondiéndole, por tanto, indemnizar los daños que se acrediten en juicio.

Sexto: Que, en lo relativo al daño material, el actor solicitó el resarcimiento del valor del vehículo, cuya valuación comercial, afirma, alcanza la suma de \$7.500.000, que es la suma que por dicho capítulo solicita, consistente en la disminución patrimonial que le significó el suceso antes relatado.

De este modo, para conceder el extremo referido, establecidos los supuestos de responsabilidad pertinentes, corresponde determinar si se comprobó el monto equivalente al daño material ocasionado.

Por su parte, la demandada, en lo pertinente, cuestionó la suma requerida, la que consideró desproporcionada, arbitraria e improcedente, al



no constar el valor comercial del vehículo siniestrado, por lo que solicita su rechazo.

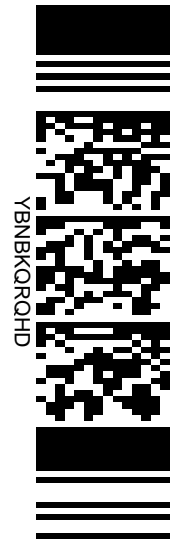
Séptimo: Que para los efectos de la determinación del perjuicio reclamado, debe recordarse, que en esta sede y tipo de procedimientos, la fórmula de apreciación de la prueba es de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esto es, conforme a los criterios del sano entendimiento, lo que significa que el juez debe regular su aproximación al material probatorio, sujetándose a las regulaciones que proveen la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados,

Octavo: Que apreciando la documental rendida en esta instancia, conforme las reglas ya indicadas, es posible tener por acreditado que al 2019 –que corresponde al año en que fue sustraído el vehículo *sub lite*–, el Servicio de Impuestos Internos, tasó los vehículos que coinciden con la marca, modelo y año de fabricación del siniestrado, en la suma de \$6.080.000.- monto que, además, se ve reflejado en el comprobante de pago del permiso de circulación, cuyo monto se calculó sobre la base de dicho avalúo.

A partir de ello, utilizando los criterios de la lógica, es posible concluir que el valor del vehículo materia de autos, propiedad del actor, no puede ser inferior al monto tasado por el órgano oficial para los fines referidos.

En efecto, el proceso de valuación que realiza el Servicio de Impuestos, se regula conforme lo estatuye el Decreto Ley N° 3.063 del año 1979 sobre rentas municipales, que en su artículo 12, establece el impuesto anual, a beneficio municipal, que grava la circulación de los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general, el cual se fija conforme una escala progresiva y acumulativa sobre su precio corriente en plaza, el cual es fijado por el Servicio referido, para cuya determinación debe aplicar una serie de criterios relacionados con su marca y año de fabricación, y, que considera, como regla general, el valor que figure en la respectiva factura, sin deducir los impuestos que indica, deduciendo un porcentaje por concepto de depreciación. Por lo demás, así se explica en las resoluciones respectivas del órgano en comento, que emite cada año, estableciendo un listado de valores de vehículos motorizados.

De esta manera, concordante con los sub principios emanados de las reglas de la lógica, correspondientes a los de coherencia, razón suficiente y no contradicción, aparece que la documental referida, reúne las características probatorias necesarias, para darle mérito probatorio, en cuanto a que el valor del vehículo objeto del juicio –monto que equivale al



daño material provocado—, y que la demandada debe resarcir, corresponde, por lo menos, a la tasación realizada por el Servicio de Impuestos Internos, que en la especie, al año calendario en que se verificó su pérdida —esto es, el 2009—, equivalía a la suma de \$6.080.000.-

Noveno: Que, de tal modo, se acogerá la apelación de la parte demandante, y se acogerá, además, la demanda, en lo relativo a la pretensión de indemnización por el daño material impetrado, por la suma de \$6.080.000, por concepto de la pérdida del vehículo siniestrado, que fuera sustraído de las dependencias de la demandada.

Se debe añadir que la demás prueba rendida, y alegaciones formuladas, carecen de fuerza para modificar las demás conclusiones recurridas, conforme fueron reproducidos los fundamentos del fallo de primer grado, según se indicó precedentemente, por encontrarse conforme a derecho.

Y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones citadas y lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley N° 18.287 y artículo 50 B de la Ley N° 19.496, se resuelve:

I) Que **se rechaza** la objeción documental formulada por la parte demandada en esta instancia.

II) Que **se revoca** la sentencia impugnada de treinta de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Policía Local de San Bernardo, en la parte que desestimó la demanda de indemnización por daño emergente, y, en su lugar, se declara que se la **acoge**, sólo en cuanto se condena a la demandada, a pagar por dicho concepto, la suma de \$6.080.000, a los que se aplicarán los reajustes e intereses establecidos en el decisorio V del fallo impugnado, **confirmándose** en todo lo demás apelado.

Redactada por el ministro señor Martínez.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 135-2021 Policía Local.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Dora Mondaca Rosales y señor Patricio Martínez Benavides y Abogado Integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.





YBNBKORQHD

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Dora Mondaca R., Patricio Esteban Martinez B. San miguel, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

En San miguel, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

